

Auto int.: 004 de 2024
Procedimiento: Ejecutivo
Demandante: La Inmobiliaria Universal S.A.S.
Demandada: Edgar Andrés Jaramillo Gómez y otros
Radicado: 05001 31 03 014 2020 00184 02
Asunto: Rechaza decreto de pruebas en segunda instancia.

**TRIBUNAL SUPERIOR
DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN
SALA UNITARIA DE DECISIÓN CIVIL**

Medellín, quince (15) de febrero del dos mil veintitrés (2023).

1. Solicita el apoderado de la parte demandada recurrente que, como prueba en segunda instancia, con fundamento en el artículo 327.2.3 del C. G del P., se decrete y practique prueba pericial grafológica sobre el título valor que fundamenta la presente demanda, amén que en realidad no fue diligenciado por el demandado Julián David Gómez Caro, pues: *“...la declaración de parte, el señor Juan Gil, representante legal de inmobiliaria universal, manifestó en repetidas ocasiones que el pagare había sido diligenciado por el difunto Julián David Gómez Caro (...) ante lo notorio de la diferencia de escrituras de los espacios correspondientes a la información, a la literalidad del título, y a la letra y escritura consignada en el espacio del codeudor JULIAN DAVID GOMEZ CARO, el suscrito le expuso la situación al despacho en los alegatos de conclusión, e incluso se argumentó las siguientes situaciones: 1. No se tachó de falso o se desconoció el documento dentro del traslado de la demanda, porque la información correspondiente a que el que diligencio el título valor fue el señor Julián David Gómez Caro, surgió con posterioridad. 2. Que, si bien el CGP establece que no tachar el documento de falso o desconocerlo establece una presunción de autenticidad, es una presunción que puede probarse en contrario, y más en este caso en donde la diferencia de escritura es notoria y evidente...”* Más adelante añadió el togado memorialista que: *“...La causal consagrada en el numeral 3 del artículo 327 establece que la prueba que se solicite, decrete y practique en segunda instancia tendrán el propósito de demostrar o desvirtuar un hecho ocurrió con posterioridad a la oportunidad para pedir pruebas. (...) Es evidente que la escritura sobre la cual hoy se busca se practique la prueba pericial grafológica tuvo lugar en el año 2017, no es menos cierto que el hecho fue solo divulgado y revelado en la audiencia inicial, momento para el cual los demandantes ya no contaban con oportunidad para poder impugnar dicha manifestación...Así es como la prueba que hoy buscamos sea practicada tendrá como finalidad desvirtuar el hecho de que Julián David Gómez Caro fue quien diligencio el título...”*

De otro lado, solicita se decrete la prueba documental relacionada con los reportes a la DIAN por parte de la Inmobiliaria Universal S.A.S. y los extractos bancarios de las cuentas de su propiedad, refiriendo como sustento de su solicitud que *“...Es evidente que las pruebas documentales indicadas en el acápite anterior NO fueron decretadas en el proceso judicial, pero sobre la negativa a su decreto se encuentra en curso 2 recursos de apelación, los cuales han sido adjudicados por reparto al actual magistrado ponente del recurso de apelación sobre la sentencia de la cual hoy solicitamos pruebas. (...) Por principio de celeridad y de concentración, esta se torna en la oportunidad idónea para que esas pruebas documentales que no fueron decretadas en primera instancia, sean decretadas y sean valoradas...”*

2. Bien, debe recordarse que las pruebas en **el curso de la segunda instancia y salvo la oficiosidad del Juez o Magistrado**, están regladas, no solo en su oportunidad para proponerlas, presentarlas o aducirlas, sino que el legislador, dentro de su libertad de configuración, estimó los eventos en que ellas eran procedentes.

No en vano la normativa contenida en el art. 327 del C. G. del P. señala con claridad solar *“...las partes podrán pedir la práctica de pruebas y el juez las decretará únicamente en los siguientes casos: “...1. Cuando todas las partes las pidan de común acuerdo. 2. **Cuando decretadas en la primera instancia, se dejaron de practicar sin culpa de la parte que las pidió.** 3. **Cuando versen sobre hechos ocurridos después de transcurrida la oportunidad para pedir pruebas en primera instancia, pero solamente para demostrarlos o desvirtuarlos.** 4. Cuando se trate de documentos que no pudieron aducirse en la primera instancia por fuerza mayor o caso fortuito, o por obra de la parte contraria. 5. Si con ellas se persigue desvirtuar los documentos de que trate el ordinal anterior...”*

De suerte que, **independientemente del análisis de su conducencia, pertinencia o utilidad de la prueba en sí misma considerada**, los condicionamientos a que se contrae la norma referenciada constituyen un insoslayable valladar, no solo para la parte interesada en el decreto de la prueba, sino para el funcionario al momento de pronunciarse si la decreta o no, como que, de no haber una correspondencia entre la prueba pedida en sede de apelación de sentencia y esos únicos casos en que ella

es procedente, conforme viene de verse, la negativa de su decreto, se impone.

3. En este caso, al analizar la solicitud elevada por el apoderado de la parte demandada, se observa que su petición tiene la irrefragable finalidad de reemplazar las oportunidades probatorias brindadas por la ley procedimental en la instrucción del proceso. Lo primero que hay que decir es que, en puridad, no se trata de **hechos ocurridos después** de la oportunidad probatoria de primera instancia -31 de octubre de 2022 cfr. pdf. 48-, ello se deduce de que el fundamento de la solicitud es la divergencia entre las escrituras a mano alzada plasmadas en los pagarés presentados por la entidad empresarial demandante, que no es otro que el momento de su otorgamiento atribuido al demandado Julián David Gómez Caro en **agosto 28 de 2017**, situación que, a la postre, fue puesta en conocimiento del togado memorialista en el traslado de la demanda y frente a la cual únicamente le enrostró un indebido diligenciamiento de cara a las instrucciones y la inexistencia del negocio que dio origen a la cartular, en otras palabras, se trata de un hecho que pudo haber sido debatido desde el inicio de la *litis* y no fue así.

Por consiguiente, es claro que no puede entenderse un hecho de la naturaleza consagrada en el numeral 3° de la citada disposición normativa, además, de aceptarse la tesis sostenida por el togado sobre unas inesperadas revelaciones probatorias en la testimonial practicada en la instrucción del proceso, resultaría casi imposible cerrar el debate probatorio en cada proceso judicial, al querer las partes controvertir con otras pruebas las conclusiones o el contenido de aquellas que se van practicando. La lógica y vicisitudes del proceso permiten entender que difícilmente las partes o sus apoderados sepan con exactitud lo que su contraparte o los testigos van a exponer sobre la causa litigiosa del proceso, por tanto, la labor del abogado concierne o, por lo menos debería, partir del análisis del acto respectivo de su antagonista, para rebatir de forma integral lo que considere perjudicial para los intereses de su poderdante, de allí en adelante, es adentrarse en los meandros de la soberanía probatoria de que es titular el funcionario en razón de la función de administrar justicia. Por este flanco entonces, la petición no prospera.

3.1. Ahora bien, la otra solicitud probatoria tampoco encaja en la hipótesis contenida en el numeral 2°, pues en ningún momento se **ha dejado de practicar** sin culpa de la parte que las pidió, si bien el hecho de haber reprochado la decisión del *a quo* impide enrostrarle una omisión en ese sentido, también implica que la petición deba resolverse en el escenario del recurso de apelación contra el auto que negó su decreto y práctica, por tratarse de razonamientos fácticos y normativos diferentes, no siendo óbice para ello el estado de latencia de la sentencia, pues la ley procesal permite que en esta instancia se reúnan también las decisiones interlocutorias pendientes. Por consiguiente, para lo que interesa a esta función jerárquica, no se observa la correspondencia entre las pruebas solicitada en sede de apelación de sentencia y los excepcionales eventos a los que se aferra el memorialista para tenerlas como procedentes.

4. Ante lo expuesto, resulta improcedente a esta Corporación acceder al decreto y práctica de las pruebas pedidas en segunda instancia, ya que, se insiste, no se encuentran inmersas en los supuestos fácticos del artículo 327.2.3. del C. G. del P., que hagan viable su decreto, por ellos de despachará negativamente la solicitud.

De esta manera, y por las razones expuestas, el ***Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín***, Sala Unitaria Civil de Decisión,

II. RESUELVE:

Negar la solicitud de pruebas elevada por el apoderado de la parte demandada.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



JULIAN VALENCIA CASTAÑO
Magistrado